

CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL, POLÍTICAS ECONÓMICAS
Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

Juan Carlos Moreno-Brid y Martín Puchet Anyul**

Introducción

Hasta hace poco se afirmaba que la crisis financiera internacional y sus efectos inaugurarán, claramente no el fin, pero sí una era diferente del capitalismo y una nueva arquitectura financiera internacional. Más cercanamente es frecuente escuchar que más temprano que tarde este episodio llevará a América Latina a emprender un rediseño en su agenda de desarrollo que implicará una redefinición de las responsabilidades, ámbitos y formas de intervención del Estado y de su interacción con los mercados. Los puntos de sustento a la primera afirmación son varios. Por un lado está la respuesta a la crisis por parte del gobierno de Estados Unidos de América (EUA), marcadas por una expansión fiscal y monetaria sin precedente, y el uso masivo de recursos fiscales para rescatar grandes instituciones financieras nacionales: Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, American International Group, Citigroup y Bank of America. Están en esa misma línea su decisión de rescatar grandes empresas automotrices, de introducir medidas para reducir el impacto de la crisis en el empleo, e iniciativas de Buy American que favorecen la compra de productos locales en vez de importados.

En el ámbito estricto de la intermediación financiera, área crítica del funcionamiento de la economía de EUA, los cambios regulatorios han llevado mucho tiempo en comenzar a cobrar forma. Tomó más de un año desde el quiebre de Lehman Brothers que detonó la crisis, para que se propusieran modificaciones regulatorias profundas en la forma de operación de diversos agentes y mercados. En efecto, en el primer año se dieron cambios poco significativos aunque incluyeron mayor protección al consumidor, y un control parcial del mercado de derivados de alto riesgo. Parte de esta magra respuesta se debió a “(...) las disputas entre diferentes reguladores, la ira de los bancos y la oposición de muchos legisladores que creen que un mayor rol del Estado en la economía solo creará nuevos problemas” (Enrich y Paletta, 2009).

En diciembre de 2009, el Congreso Legislativo finalmente aprobó - aunque por escasamente 223 contra 220 votos - una reforma regulatoria del sistema financiero de EUA. Esta, por demás significativa, implica la creación de una agencia federal para proteger al consumidor de prácticas crediticias abusivas, la adopción de nuevas reglas para acotar la participación de la banca en el mercado de activos de riesgo que detonó la crisis, y de reglas preventivas para evitar que el colapso de algunos bancos de inversión pueda -como ocurrió ahora- poner en riesgo la estabilidad de toda la economía.

¿Qué implica para América Latina esta modificación de la política económica en EUA? En primer lugar, si bien la retórica oficial ha insistido en que se trata de acciones

* Juan Carlos Moreno-Brid es Coordinador de Investigaciones de la [Comisión Económica para América Latina y el Caribe](#) (CEPAL) en México.

* Martín Puchet Anyul es profesor de la [Facultad de Economía](#) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

coyunturales ante la emergencia, la práctica sugiere que en el área fiscal y financiera se da un cambio mayúsculo en la relación estado-mercado. De hecho, con esta reacción del gobierno del presidente Obama se rompe con lineamientos básicos del “Consenso de Washington”, prevaleciente en América Latina en gran parte de los '80 y '90, que recomendaba minimizar la intervención del sector público en la economía, eliminar el déficit fiscal y las barreras al comercio internacional. Con este rompimiento en la región se abre un espacio en el campo ideológico y técnico para un diseño más pragmático de políticas macroeconómicas, alejándose de la ortodoxia que ve al balance fiscal no deficitario, a la apertura comercial, las privatizaciones y la cancelación de políticas de promoción sectorial como pilares de una única estrategia macroeconómica viable para asegurar un crecimiento sostenido de mediano y largo plazos. Más aun, esta mayor libertad en el terreno de las ideas se acompaña en América Latina de una urgente necesidad de aplicar políticas para aminorar el agudo impacto de la crisis internacional sobre el empleo, la producción y la inversión locales así como para, a la vez, remover las restricciones fundamentales que bloquean el crecimiento económico y agudizan la desigualdad en la región.

En efecto, la crisis internacional ha interrumpido drásticamente el quinquenio 2003-08 de sostenida y fuerte expansión económica en Latinoamérica. En estos años, apoyada en una mejora de los términos de intercambio y de un franco acceso al mercado de capitales, la región en su conjunto logró elevar anualmente su Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en más de 3%. El 2009, sin embargo trae en diversos países una contracción de su actividad productiva. Actualmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en este año el PIB real de la región caerá 1.8 en términos reales, en contraste con el alza de 4.1% que tuvo en 2008 (véase tabla 1). Esta merma en el nivel de actividad se reflejaría en un deterioro importante en el mercado laboral. Así mientras que entre 2003 y 2008 la tasa de desempleo bajó persistentemente para ubicarse en poco más de 7%, en el 2009 se prevé un alza de casi un punto para llegar a 8.3%. Este magro desempeño de la ocupación incide en la tasa de pobreza. Así, la incidencia de la pobreza en la región interrumpe la tendencia decreciente que mostraba en los últimos seis años, y subirá a 34.1% frente al 33% registrado en 2008. La indigencia, por su parte se elevará a 13.9% frente a 12.7% del 2008 (CEPAL, 2009). En números absolutos este deterioro significa 9 millones más de pobres, de los cuales 5 millones son indigentes.

Entre los que mayores caídas registran en su nivel de actividad en 2009 destaca México, si bien la recesión afecta los cinco países de Centroamérica y al Caribe. De hecho de 20 países latinoamericanos para los que la CEPAL hace seguimiento se estima que la mitad está en recesión en el 2009. Cabe notar, sin embargo, que si bien es generalizada en la región, la pérdida de impulso en la economía, con la excepción de México, la caída en el PIB en 2009 es menos intensa que las registradas en las crisis acontecidas en los años '80 y '90 del siglo pasado. Más aun, de acuerdo a diversos indicadores, al parecer lo más grave de la recesión ha quedado atrás ya en el segundo semestre del año, y se estima que en el 2010 el PIB se expanda 4% en términos reales a nivel regional. Resta ver si dicha recuperación efectivamente se concreta y si mantiene un fuerte impulso. Para un número importante de países de la región esto último es poco probable pues dependen críticamente del ritmo de expansión de la de Estados Unidos; que de acuerdo a diversos analistas será menos intenso que en el pasado reciente.

Tabla 1. Crecimiento económico en América Latina 2007-2010

Producto interno bruto total
(Millones de dólares a precios constantes de 2000) Tasas de variación

País	2007	2008	2009 ^a	2010 ^b
Argentina	8.7	6.8	0.7	4.0
Bolivia	4.6	6.1	3.5	4.5
Brasil	5.7	5.1	0.3	5.5
Chile	4.7	3.2	-1.8	4.5
Colombia	7.5	2.4	0.3	2.5
Costa Rica	7.8	2.6	-1.2	3.5
Cuba	7.3	4.1	1.0	3.0
Ecuador	2.5	6.5	-0.4	3.0
El Salvador	4.7	2.5	-2.5	2.0
Guatemala	6.3	4.0	-1.0	2.0
Haití	3.4	1.3	2.0	2.0
Honduras	6.3	4.0	-3.0	1.5
México	3.4	1.3	-6.7	3.5
Nicaragua	3.2	3.2	-1.5	2.0
Panamá	12.1	10.7	2.5	4.5
Paraguay	6.8	5.8	-3.5	3.0
Perú	8.9	9.8	0.8	5.0
República Dominicana	8.5	5.3	2.5	3.5
Uruguay	7.6	8.9	1.2	5.0
Venezuela	8.2	4.8	-2.3	2.0
Sub-total América Latina	5.8	4.2	-1.8	4.1
El Caribe	3.1	0.8	-2.1	1.8
América Latina y el Caribe	5.8	4.1	-1.8	4.1

Notas: a) Tasa estimada, b) Tasa proyectada.

Fuente: Balance Preliminar de América Latina, CEPAL, diciembre 2009.

Con todo, aun si se recobra cierto ritmo de expansión económica de América Latina en el 2010, es poco factible que sus efectos repercutan en el corto plazo de manera significativa en el empleo, la pobreza y la desigualdad. Ante esta adversa situación - y como mencionamos arriba - algunos analistas han abierto la interrogante sobre si los gobiernos de la región modificarán y ampliarán la forma y escala de intervención del Estado en la economía buscando por un lado aminorar los impactos adversos de la crisis y, por otro, sentar bases de una renovada agenda de políticas para un cambio estructural que permita insertar a la región en una senda de desarrollo robusto y sostenido.

Para comenzar a responder a esta interrogante cabe recordar que al menos en el campo retórico, en diversos países de América Latina el cambio hacia una nueva agenda de desarrollo comenzó en los noventa, más de una década antes de la actual crisis financiera internacional, con la llegada al poder por la vía democrática de gobiernos de la llamada Nueva Izquierda. En efecto, el desencanto con los resultados del consenso de Washington llevó a lo largo y ancho de la región a la ciudadanía latinoamericana a elegir candidatos cuyas plataformas políticas explícitamente rechazaban el Consenso mencionado y proponían una nueva estrategia macroeconómica cimentada en una mayor participación del Estado en la economía.

Esta nueva estrategia tuvo un mayor grado de concreción y viabilidad en los países de la región con dotación abundante de recursos minerales o naturales. En ellos, el alza drástica y persistente de sus términos de intercambio les dio extraordinarios ingresos fiscales gracias a que lograron una captura mayor de las rentas por la explotación de sus recursos minerales, sea por renegociar los derechos y contratos de explotación correspondientes con las compañías transnacionales o por imponer nuevos gravámenes a la exportación. Los más radicales en este sentido - Argentina, Venezuela, Bolivia y hasta cierto punto Ecuador - intervinieron en mercados seleccionados y nacionalizaron diversas compañías. El acceso a recursos fiscales extraordinarios les permitió cancelar sus compromisos con organismos financieros internacionales e impulsar significativos programas de obras públicas o de protección social sin deteriorar mayormente sus balances fiscales. Otros gobiernos mantuvieron en la práctica una política macroeconómica ortodoxa pero complementada con el reforzamiento de los programas sociales y de la política industrial.

Es decir, en América latina el giro - retórico o real - hacia un reforzamiento de la intervención del Estado en la economía comenzó a darse casi una década antes de que se detonara la crisis financiera internacional de 2008-09. Siendo esto así ¿en que sentido es que podría esperarse que los gobiernos de la región busquen modificar su estrategia macroeconómica o su agenda de desarrollo a raíz de la crisis internacional? ¿Cómo están reaccionando los gobiernos y sus ciudadanos ante dicha crisis?

Mecanismos de transmisión de la crisis y políticas económicas para enfrentarla

Primeramente hay que subrayar que los efectos de la actual crisis internacional se transmiten a América Latina a través de los mercados de bienes/servicios, las remesas y ciertos flujos de capital externo. Es decir, fundamentalmente, no tuvieron como canal relevante la inestabilidad o fragilidad de sus sistemas financieros. Fuese por la limitada sofisticación bancaria y financiera de la región, o porque su regulación correspondiente había sido suficientemente fortalecida a raíz de las crisis bancarias ocurridas en las últimas dos décadas del siglo XX, el caso es que en el 2008-09 América Latina no ha experimentado quiebra importante de instituciones financieras locales, ni corridas de sus sistemas bancarios. De hecho sus sistemas financieros en general tienen un bajo grado de exposición al riesgo internacional, lo que hace que la oferta de créditos internamente sea poco sensible a los choques que sufren los mercados financieros internacionales (Kacef, 2009). Empero sí se ha producido una restricción del crédito externo al sector privado, con lo que diversos corporativos industriales o de servicios también han sufrido pérdidas masivas por especular en derivados y divisas.

¿En qué medida la actual crisis ha afianzado o revertido el grado de intervención del Estado en la esfera económica en diversos países de la región, ya sea en el campo de estabilización macroeconómica o en el de promoción del desarrollo en los países latinoamericanos? ¿Cabe esperar que, para enfrentar el choque externo, se de un golpe de timón en las políticas económicas? ¿Se adoptarán estrategias más intervencionistas, que promuevan un mayor gasto y déficit fiscal que en el contexto de una caída fuerte en los ingresos presupuestales, de contracción económica y de deterioro de los términos de intercambio quizá sea excesivo?

Para dar respuesta a estas interrogantes hay que considerar dos ámbitos diferentes, si bien relacionados, de la política económica. El primero es el de la estabilización económica. Tiene su horizonte de preocupación más bien de corto plazo y abarca los aspectos o instrumentos para aminorar el impacto adverso de los choques externos típicamente sobre la inflación y el balance fiscal, aunque debería de ocuparse cada vez más de la actividad productiva y del empleo. El segundo, con perspectiva de mediano y largo plazos, se ocupa de cómo sentar las bases para que - a la vez que se lucha por aminorar los impactos adversos de la crisis- se logre una transformación estructural de la economía que ayude a garantizar un crecimiento elevado y sostenido con equidad; un verdadero y profundo desarrollo humano.

Estabilización

En lo que concierne a los esfuerzos para estabilizar las economías de la región ante los impactos de la actual crisis internacional, todos los países de América Latina han respondido anunciando la puesta en marcha de políticas contracíclicas. En efecto, en algunos países desde fines de 2008 y en todos en 2009, ante la aguda preocupación por la desaceleración de la actividad productiva, de las caídas del ingreso y del empleo y sus repercusiones en la pobreza y la equidad - dada la ausencia de redes universales de protección social y de seguros a la desocupación - los gobiernos comenzaron a utilizar diversos instrumentos y programas para abatir los impactos adversos y estabilizar sus economías. La magnitud y alcance de dichos programas, y su oportunidad no son los mismos en los diferentes países. Tal diferencia es resultado en parte de la voluntad de los gobiernos mismos y la presión política a la que se ven sujetos, y en parte de su capacidad fiscal, su acervo de reservas internacionales y sus posibilidades de acceso al crédito externo.

La respuesta ante la crisis internacional en cada uno de los países de la región sin excepción incluye políticas de expansión monetaria por parte de la Banca Central y también -aunque de muy diversa magnitud- un impulso fiscal. Al respecto, Brasil es uno de los países cuyo paquete de políticas fiscales para impulsar el crecimiento es de los más significativos en la región, además de que está utilizando muy activamente a la banca de desarrollo para ofrecer créditos. Junto con Argentina, es de los países de la región cuyos programas anti-crisis son mayores. Chile igualmente destaca en este terreno.¹ Perú y México también están entre los que inicialmente anunciaron relativamente cuantiosos paquetes fiscales para la estabilización macro. Sin embargo, en este último, la reciente propuesta de presupuesto público para 2010 tiene recortes en el

¹ La magnitud real de los paquetes fiscales de apoyo ante la crisis puestos en marcha por los diferentes países debe estimarse con cuidado y su magnitud real puede estar sujeta a discusión. En ocasiones incluye programas meramente anunciados o pre-existentes que fueron re-clasificados. En otros, por ejemplo Brasil, parten de presupuestos con fuertes gastos fiscales para impulsar el crecimiento y que simplemente han mantenido su impulso. Nótese en todo caso, que la evaluación de su impacto es tarea pendiente.

gasto y alzas tributarias considerables que a priori reflejan mayor preocupación por cerrar el déficit fiscal.²

Por el lado de la política monetaria, los bancos centrales han sido elemento fundamental de la estrategia de estabilización de las economías latinoamericanas en esta crisis. Ya en el segundo semestre del 2008, en el contexto de deterioro de los indicadores de riesgo país a lo largo y ancho de la región, aprovecharon el régimen de tipo de cambio flexible y permitieron inicialmente agudas depreciaciones cambiarias, para después inyectar divisas en el mercado local usando las reservas internacionales. Tal opción fue posible debido a la vasta acumulación de divisas que procuraron los países en desarrollo - desde los noventa y sobre todo ya en la década actual - a raíz de las diversas crisis subregionales de balance de pagos. Algunos, como México, Colombia y Brasil, concertaron en 2009 líneas de crédito especiales ya sea con la Federal Reserve o a través de la nueva línea de financiamiento flexible del Fondo Monetario Internacional. Estas acciones de las autoridades monetarias de los países fueron cruciales para evitar corridas cambiarias y proveer divisas al sector privado para enfrentar sus compromisos financieros. Con ello, además del apoyo a grandes empresas, se abatieron las presiones sobre el tipo de cambio y se revirtió parcialmente la tendencia a la depreciación. Dieron el margen de respiro financiero necesario que permitió el reingreso de la región al mercado de capitales ya en el primer trimestre del 2009. Además, al acotar el margen de depreciación cambiaria evitaron espirales inflacionarias.

Una limitante del alcance del componente fiscal en la política de estabilización contracíclica en la región es la debilidad y vulnerabilidad de los ingresos tributarios. Con escasas salvedades, entre las que destacan Brasil y Argentina, dichos ingresos representan menos de 20% del PIB. Además algunos ingresos son muy vulnerables a las caídas en el comercio o en los términos de intercambio. Ello reduce las posibilidades de expandir significativamente el gasto público ante una crisis exógenamente originada, a menos que se eleve el déficit fiscal, se cuente con suficientes fondos de estabilización acumulados en bonanzas anteriores, o haya franco acceso a fuentes de financiamiento fresco. Estas dos últimas condiciones no son la regla en la región en la coyuntura actual. Con la excepción de Chile, ningún país latinoamericano tiene un ahorro suficiente acumulado y, para la vasta mayoría, el acceso al financiamiento externo a costo accesible y en las magnitudes necesarias para sustentar una política contracíclica efectiva es más la excepción que la regla. Recuérdese que hoy en día los organismos internacionales enfrentan una demanda de fondos por países de Europa, Asia y Africa – además de los de América Latina - que rebasa ampliamente sus recursos.

Desarrollo

Como mencionamos en la introducción, un punto central en este ámbito es que los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para enfrentar la crisis actual, están procurando la reorientación de la intervención del Estado en la esfera económica, de manera conspicua, al menos temporalmente. En cambio, en muchos países de nuestra región en la práctica, al menos hasta ahora, la crisis no ha modificado mayormente las pautas de los diferentes

² De acuerdo al Economist Intelligence Unit (noviembre 2009), y en parte gracias a la fuerte contracción de sus ingresos fiscales petroleros y no petroleros, el ministerio mexicano de finanzas ha modificado su prioridad a lo largo del 2009, de estar inicialmente concentrado en aminorar los impactos reales de la crisis hacia mejor preservar su tradición de manejo prudente de las finanzas públicas.

gobiernos en cuanto al balance estado-mercado en la conducción de su política de desarrollo.

Así, en América Latina en general se han manteniendo esencialmente inalterados el ámbito, escala y modo de orientación de la intervención del Estado en cuanto a la promoción del desarrollo. Las economías de la región que se han caracterizado durante los últimos años por una más marcada intervención estatal - como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina - han seguido profundizando su perfil. Por su parte, a raíz del estallido de la crisis global en general los otros países latinoamericanos tampoco han alterado mayormente su agenda de desarrollo ni el rol asignado al Estado en ella.

Las excepciones son escasas – Panamá y El Salvador. En ellas la reorientación de la política económica surge de la derrota del partido en el poder en la elección presidencial. En el primer caso, Ricardo Martinelli derrotó a Balbina Herrera, candidata del Partido Revolucionario Democrático en el poder. En el segundo, Mauricio Funes fue electo con lo que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llega por primera vez al Poder Ejecutivo; después de varios períodos con gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Esto, nos parece, tiene que ver relativamente más con el típico desencanto de la ciudadanía con los partidos en el gobierno en épocas de crisis que les mina sus posibilidades de cumplir las expectativas de mejoría y bienestar surgidas a raíz de las promesas de campaña, y relativamente menos con un cuestionamiento de fondo de la estrategia de desarrollo.³

Dos ejemplos hasta cierto punto comparables son México y Argentina, donde las elecciones legislativas intermedias de hace unos meses arrojaron una mayor inclinación a favor de partidos de oposición y con ello dieron lugar a la recomposición de sus Cámaras Legislativas. Dicha recomposición conlleva como reto mayúsculo para el Ejecutivo la formación de consensos inter-partidarios para aprobar reformas económicas en la parte restante de su mandato. La situación en Honduras, aunque sin duda más compleja, ha llevado a una elección presidencial de un partido distinto al del depuesto presidente Zelaya cuya perspectiva de ejercicio de poder no está exenta de complejidades. Por otra parte en contraste tenemos a Bolivia y Uruguay cuyas inmediatamente recientes elecciones presidenciales no repercutieron en cambio alguno en cuanto al partido en el poder y su orientación ideológica. En Chile la elección del domingo 13 de diciembre, si bien pasó a segunda vuelta, registró un menor número de votos para el candidato de la Concertación – en el poder - que al de la oposición. Habrá que ver si las elecciones presidenciales que estarán teniendo lugar en el 2010 en América Latina se traducen o no en un giro en las políticas o estrategias de desarrollo.⁴ Al respecto, y si bien no hay acuerdo en torno al futuro de la política económica en la región, es importante resaltar que *Standard & Poor's Ratings Services*, una de las más connotadas agencias calificadoras de riesgos, concluye lo siguiente: “Aunque todavía es muy pronto para llegar a conclusiones definitivas, las primeras señales sugieren que la recesión actual (...) podría debilitar el atractivo de algunos aspectos del modelo económico de mercado que emanó de Washington, pero es poco probable que afecte los pilares de la estrategia de desarrollo económico que la mayoría de los gobiernos de la región han seguido en los últimos años. La recesión podría fortalecer a la izquierda

³ La situación en Honduras está en un proceso que no permite concluir si habrá o no cambios sustanciales en la orientación de la agenda de desarrollo, y el papel que tendrá el Estado en su promoción e impulso.

⁴ República Dominicana (mayo 2010), Costa Rica (feb. 2010), Colombia (mayo 2010), Brasil (oct. 2010) y Venezuela (dic. 2010)

moderada en América Latina que rechaza el populismo y crear un consenso político más fuerte en torno a las políticas macroeconómicas pragmáticas”.⁵

Hasta ahora la crisis financiera global y sus impactos no están repercutiendo en la práctica en un cambio significativo en las agendas de desarrollo que han adoptado los gobiernos en el poder en los diferentes países de la región. Los que tenían una proclividad mayor por la economía del libre mercado y apertura comercial continúan con ella. Tienden a proponer que para apuntalar el futuro desarrollo de sus países es indispensable profundizar las reformas neoliberales de épocas previas hacia las llamadas de segunda o de tercera generación. Por su parte, los gobiernos de la región que adoptaron ya hace casi una década una estrategia de desarrollo basada en la mayor injerencia del Estado en la asignación de recursos continúan con tal orientación esencialmente inalterada y, quizá, la han acentuado. Punto crítico en la discusión sobre la viabilidad de dicha pauta de desarrollo en el corto y mediano plazos en varios de ellos es si podrán mantener el ritmo del gasto público si sus ingresos fiscales continúan deteriorándose *pari passu* con la caída de sus términos de intercambio y un restringido acceso a los mercados de capitales internacionales.

Gobernabilidad democrática ¿bajo presión?

Independientemente de que los gobiernos latinoamericanos sigan las políticas pragmáticas, en el sentido que le dan los calificadores de *Standard and Poor's* o que se inclinen por una mayor intervención del estado, las restricciones de largo plazo de las economías latinoamericanas no parecen haberse modificado ni durante el auge de los años 2003-2008 ni que vayan a resolverse por medio de las respuestas a la crisis financiera global. Las dificultades que enfrentan la mayoría de los estados que siguieron hasta la mitad de los noventa las prescripciones del consenso de Washington o, por lo menos, hicieron algunas sus reformas tendientes a reducir el papel del estado deberán enfrentar más temprano que tarde tres asuntos de política económica que se imponen ante la crisis. Ellos son los tres siguientes.

El primero es el aumento del monto porcentual de la inversión y la orientación de la misma para alentar el crecimiento, promover la innovación y remover obstáculos estructurales (sobre los recursos ambientales, físicos y humanos) que hay para lograr una transformación productiva con equidad. El segundo es la concepción de políticas específicas contra la desigualdad en la medida que ella distorsiona el funcionamiento de los mercados y, en particular, las condiciones que aseguren la inserción de las personas con remuneraciones dignas en el mercado de trabajo, la asignación de remuneraciones equitativas mediante los arreglos que se hacen en dicho mercado y la salida del mismo después del ciclo de vida activo en condiciones justas. El tercero son los requerimientos de políticas fiscales y monetarias orientadas a la inversión, la disminución de la desigualdad, la protección social y la estabilización de los precios.

La gobernabilidad de las sociedades latinoamericanas dependerá, en el largo plazo, de la capacidad de sus actores sociales y partidos políticos para poner en marcha un contrato

⁵ No está demás señalar que la calificador de riesgo identifica explícitamente como políticas pragmáticas la apertura al comercio y a la inversión extranjera, la privatización, la liberalización financiera y la conducción prudente de la política monetaria-fiscal para evitar grandes déficit y alta inflación. Y considera que entre las economías de la región que tienen calificación de su deuda soberana, “(...) solamente Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han estado siguiendo un conjunto claramente diferente de políticas económicas en los últimos años” (Standard and Poor's Rating Services, 2009).

social expresado en un nuevo pacto fiscal que asegure a los estados, por un lado, los ingresos tributarios para resolver los asuntos planteados. Y que, por el otro lado, incorpore mecanismos efectivos de supervisión de la orientación pertinente y la transparencia en la asignación de los gastos gubernamentales. Conseguir los apoyos políticos para esa concertación es cada día más acuciante en la medida que el dinamismo de la economía internacional y el acceso al crédito externo según los pronósticos de las agencias internacionales no serán rápidos ni suficientes. Estas son las presiones efectivas que actuarán sobre la gobernabilidad democrática de América Latina en los próximos años.

Por lo pronto un reflejo, muy incipiente pero no por ello menos preocupante, de la magnitud de estas presiones en algunos países se encuentra en la reciente encuesta de Latinobarómetro en las respuestas a la pregunta siguiente: “Si usted tuviera que elegir entre la democracia y el desarrollo económico sin democracia, ¿Qué preferiría usted?”

Si bien el promedio regional dio 44% a favor de la primera opción, es decir de la democracia, y 39% a favor de la segunda, en diversos países la ponderación al desarrollo económico fue considerablemente mayor. Así en Guatemala solo 27% dijo preferir la democracia frente a 61% que dijo, en dado caso, preferir un desarrollo económico. Los porcentajes de México fueron similares, 30% versus 60%, y con menor diferencia, también los de Paraguay (21% vs 57%), Colombia (29% vs 55%), Ecuador (35% vs 53%), Perú (32% vs 50%) y Chile (37% vs 43%).

Por otra parte debe subrayarse que la misma fuente reportó para todos los países de América Latina que más del 60% de su población encuestada está de acuerdo con la afirmación de que “la democracia puede tener problemas, pero es la mejor forma de gobierno”. En todo caso, aun si la gobernabilidad no está en riesgo, es imperativo que los gobiernos tengan éxito en que las medidas que están tomando ante la crisis aminoren los impactos sociales adversos de ésta sobre el empleo, la pobreza y sus diversas manifestaciones, a la vez que sienten bases para insertar a sus economías en una senda de crecimiento elevado y sostenido con equidad. Fracasar en ello es algo que la región no puede permitirse por diversas razones quizá la más importante es la de cimentar y preservar los valores democráticos y conseguir un goce pleno y efectivo de los derechos humanos en nuestras poblaciones.

Referencias

- CEPAL (2009) 'Balance Preliminar de la Economía de América Latina'. Santiago de Chile: CEPAL
- Economist Intelligence Unit (2009) 'Mexico: Country Report', noviembre
- Enrich D., D. Paletta (2009) 'A un año del estallido de la crisis, la reforma financiera no se concreta', *The Wall Street Journal Americas*, 10 de septiembre
- Kacef O. (2009) 'Crisis and public policies in Latin America and the Caribbean', en O. Kacef, J.P. Jiménez (eds.) [*Macroeconomic policies in times of crisis: options and perspectives*](#). Santiago de Chile: ECLAC, UN
- Standard & Poor's (2009) ['Impacto de la recesión global sobre las políticas en América Latina: Razones para el optimismo'](#), 18 de agosto.